



## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

Buenos Aires, 23 de agosto de 2024.

### AUTOS Y VISTOS:

Para resolver sobre en la presente causa **CPE 936/2012/TO1**, caratulada: **“BALTASAR, CRISTIAN HERNAN; BALTASAR, JORGE S/ INF. LEY 24.769 (ARTS. 1º Y 2º INC. B)”** y su acumulada **CPE 1194/2014/TO1**, caratulada: **“BALTASAR, CRISTIAN HERNAN; BALTASAR, JORGE S/ INF. LEY 24.769 (ARTS. 7º Y 8º INC. B)”** del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, seguidas a **Cristian Hernán BALTASAR**, DNI N° 22.808.355 y a **Jorge BALTASAR**, DNI nro. 4.427.857, asistidos por su letrado defensor Dr. Augusto Nicolás GARRIDO.

Asimismo, interviene en representación de la parte Querellante AFIP-DGI, el Dr. Leandro DÍAZ (designado en causa CPE 936/2012/TO1) y por AFIP-DGRSS los Dres. Leandro Martín TORRES y María José BALESTRETTI (designados en causa CPE 1194/2014/TO1).

En representación del Ministerio Público Fiscal, interviene el Fiscal General de Juicio, Dr. Marcelo AGÜERO VERA y la Dra. Melina SINGEREISKY, Auxiliar Fiscal de la Fiscalía Nro. 3 ante los Tribunales Orales del fuero.

### RESULTANDO:

**I.-** Que, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio de los acusadores efectuados en causa CPE 1194/2014/TO1, se le imputa a Cristian Hernán BALTASAR y Jorge BALTASAR, el evadir el pago de las sumas destinadas al sistema de la seguridad social correspondientes a la firma “CLITEC S.A.”, mediante la presentación de declaraciones juradas en las que se expusieron remuneraciones menores a las que surgían de los recibos de sueldo de los empleados de la firma y a las dispuestas por el convenio colectivo correspondiente, por los siguientes períodos: octubre/2008, diciembre/2008 a abril/2009, agosto/2009 a febrero/2011 y abril/2011 a agosto/2011.

Fecha de firma: 23/08/2024

Firmado por: JORGE ALEJANDRO ZABALA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIANA CALAON, SECRETARIA DE CAMARA



#34189646#424075789#20240823113818015

Dichos hechos fueron calificados como constitutivos del delito previsto en el art. 8° inc. b, en función del art. 7° de la Ley 24.769 y atribuido a los nombrados en calidad de autores (cfr. requerimiento fiscal de elevación a juicio de fecha 18/10/18).

Se advierte que, mediante el auto de elevación a juicio fecha 5/11/2018 de los autos CPE 1194/2014/TO1, se dispuso: “...**I. DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL** seguida contra Cristian BALTASAR y Jorge BALTASAR en orden a los hechos consistentes en las presuntas evasiones de pago de los aportes y de las contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social de los empleados en relación de dependencia de CLITEC S.A. relativos a los períodos mensuales 10/08, 12/08, 1/2009, 2/2009 y 3/2009. **II. SOBRESEER** parcialmente en la causa y con respecto a los antes nombrados y a los sucesos recordados por el punto I (art. 336, inc. 1o del C.P.P.N.). **III. RECHAZAR PARCIALMENTE** los requerimientos de elevación a juicio efectuados por la parte querellante y por el señor representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 1512/1517vta. y 1519/1530, respectivamente, en cuanto por aquellos se solicitaba la elevación respecto de los periodos mensuales 10/08, 12/08, 1/2009, 2/2009 y 3/2009. **IV. HACER LUGAR parcialmente (en función de lo dispuesto por los puntos I y II)** a los requerimientos de elevación a juicio efectuados por la parte querellante y por el señor representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 1512/1517vta. y 1519/1530, respectivamente, **DECLARAR PARCIALMENTE CLAUSURADA LA INSTRUCCIÓN y ELEVAR PARCIALMENTE LA PRESENTE CAUSA A JUICIO** con relación a Cristian BALTASAR y Jorge BALTASAR, y en orden a los hechos consistentes en las presuntas evasiones de pago de los aportes y de las contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social de los empleados en relación de dependencia de CLITEC S.A. relativos a los períodos mensuales 4/09, 08/09 al 2/11 y 4/11 al 8/11 (confr. arts. 350 y 351 del C.P.P.N.).”.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

**II.-** Que, mediante requerimiento de elevación a juicio formulados por los acusadores en causa CPE 936/2012/TO1, se imputa a Cristian Hernán y Jorge BALTASAR, la evasión del pago de los siguientes impuestos a los que se encontraba obligada la contribuyente “CLITEC S.A.”, así: a) Impuesto al Valor Agregado ejercicio anual 2011, por la suma de \$6.097.030,98 y; b) Impuesto a las Ganancias, correspondiente al ejercicio fiscal 2010 por la suma de \$3.983.168,55,

Dichos hechos fueron calificados como constitutivos del delito de evasión agravada siguiendo lo previsto en el art. 2° inc. b, en función del art. 1° de la Ley 24.769 (cfr. requerimiento fiscal de elevación a juicio de fecha 12/9/19).

Seguidamente, el Sr. Juez a cargo de la instrucción -mediante el auto de fecha 03/10/2019- dispuso la elevación parcial a juicio de los autos CPE 936/2012, en orden a la presunta evasión de pago de los siguiente montos, períodos y concepto: \$6.097.030,98 períodos fiscales 6/2010 a 5/2011 IVA (ejercicio anual 2011); y \$ 3.983.168,55 períodos fiscales 6/2009 a 5/2010 Impuesto a las Ganancias (ejercicio anual 2010), a los que se habría encontrado obligada la contribuyente CELTIC S.A.

**III.-** Que, durante el trámite de las causas acumuladas en este Tribunal, fueron proveídas las pruebas ofrecidas (cfr. art. 357 del CPPN) y con fecha 4/4/22, fue fijada audiencia de debate oral para llevarse a cabo los días 5 y 7 de septiembre de dicho año, conforme lo dispuesto en el art. 359 del CPPN. Posteriormente, los imputados Cristian Hernán BALTASAR y Jorge BALTASAR solicitaron la suspensión de juicio a prueba de las causas seguidas a su respecto en los términos del art. 76bis del CP.

En consecuencia, se celebró, con fecha 2/2/23, la audiencia prevista en el art. 293 del CPPN, oportunidad en la cual el letrado Defensor ratificó la solicitud de suspensión de juicio a prueba efectuada. En forma subsidiaria, solicitó se evalúe la posibilidad de aplicar el instituto previsto en el art. 59

**inciso 6to. del CP.**

Fecha de firma: 23/08/2024

Firmado por: JORGE ALEJANDRO ZABALA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIANA CALAON, SECRETARIA DE CAMARA



#34189646#424075789#20240823113818015

**IV.-** Que, escuchadas las partes, con fecha 23/2/23, este Tribunal resolvió: “...**1.- NO HACER LUGAR** al pedido de extinción por reparación integral efectuado por la Defensa de Jorge BALTASAR y Cristian H. BALTASAR, en los términos del art. 59 inciso 6 del CP. **2. NO HACER LUGAR** a la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada por los imputados Jorge BALTASAR y Cristian H. BALSTAR...”.

**V.-** Que, como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la Defensa, con fecha 9/11/23, la Sala II de la CFCP resolvió: “...**HACER LUGAR** al recurso de casación deducido por la defensa particular de Cristian Hernán Baltasar y Jorge Baltasar, **ANULAR** la decisión recurrida y **REENVIAR** las actuaciones al tribunal a quo, a fin de que, luego de recabar la información pertinente y actualizada sobre los montos adeudados y asegurando la debida intervención de las partes, dicte un nuevo pronunciamiento. Sin costas (arts. 471 y 531 y cc. del CPPN)...”.

**VI.-** Que, una vez obtenidos informes actualizados sobre el perjuicio fiscal de la contribuyente CLITEC S.A. ante AFIP (de fechas 6/3/24, 13/3/24, 23/4/24 y 24/4/24), se fijó fecha para nueva audiencia en los términos de los arts. 22 del CPPF y 293 del CPPN. Así las cosas:

#### **Sobre el trámite de los planteos efectuados**

a) En el marco de la audiencia iniciada el 19/4/24, la Defensa expresó que ratificaba la solicitud de extinción de la acción penal mediante la vía de la reparación integral de conformidad con lo establecido en el art. 59 inc. 6° del C.P. en favor de sus defendidos, tomando los períodos investigados en autos CPE 936/2012/TO1, como así también los correspondientes al expediente 1194/20147TO1, para lo cual los imputados se comprometían a efectuar el pago total de los montos actualizados informados por las Querellas a pagar en el plazo de un mes.

Durante la continuación de la audiencia celebrada el 29/4/24, la Defensa de los imputados reiteró que en el caso deberían tenerse en cuenta sólo los





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

períodos por los cuales se encuentran los autos elevados a juicio y no por aquellos períodos por los cuales se declaró la prescripción y se dictó el sobreseimiento en el Juzgado Instructor. En virtud de ello, especificó que Cristian BALTASAR ofrecía pagar en concepto de reparación integral el monto total actualizado de \$124.620.908.

En forma subsidiaria, solicitó se evalúe nuevamente la posibilidad de suspender el proceso a prueba en los términos del art. 76 bis del C.P. En relación a ello, manifestó que debía considerarse la imposibilidad de aplicar en el caso una pena de cumplimiento efectivo atento al estado de salud actual de sus imputados, respecto de quienes resaltó que Cristian BALTASAR padece parkinson avanzado y Jorge BALTASAR se encontraba internado por haber sufrido días atrás de la audiencia un accidente cardiovascular (ACV).

Resaltó que la prohibición contenida en la redacción actual del último párrafo del art. 76bis del CP no era aplicable al caso atento a la fecha de los hechos objeto de esta causa. También, expuso que el planteo era posible toda vez que Cristian BALTASAR ofrecía abonar en concepto de reparación del daño la totalidad del perjuicio calculado a raíz de los nuevos informes aportados por las Querellas de autos, es decir, la suma total de \$124.620.908. Con relación a las tareas comunitarias solicitó la eximición de las mismas, en virtud del estado de salud de los imputados y finalmente, solicitó se aplique el instituto por el término de un año.

Por último, hizo expresa reserva de recurrir eventualmente en casación.

**b)** La parte Querellante AFIP-DGI reiteró su oposición a la aplicación del instituto previsto en el art. 59 del CP con los mismos fundamentos desarrollados con anterioridad destacando que la actualización del ofrecimiento efectuado por la Defensa en el marco de la causa CPE 936/2013 /TO1 no modifica la posición de dicha parte. Puntualmente, manifestó que no se encuentran reunidos los requisitos para su aplicación en orden a la especialidad que posee la ley penal tributaria, conforme el argumento ya ~~expuesto en audiencias anteriores.~~

Fecha de firma: 23/08/2024

Firmado por: JORGE ALEJANDRO ZABALA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIANA CALAON, SECRETARIA DE CAMARA



#34189646#424075789#20240823113818015

En relación a la suspensión de juicio a prueba planteada nuevamente por la Defensa, mediante la presentación de fecha 7/5/24, la Querella resaltó que dicho planteo ya fue resuelto en estos autos por el Tribunal y confirmada su negativa por la Cámara de Casación Penal. Sin perjuicio de ello, reiteró la oposición esgrimida oportunamente sustentada en que el monto mínimo de la pena para el delito de evasión agravada imputado impide la aplicación de una condena en suspenso conforme lo establecido por el art. 26 del C.P.

Recordó que más allá de la doctrina emanada de la CSJN a favor de la tesis amplia del instituto de la probation a través de precedentes como “Acosta” y “Cangiaso”, para la procedencia del instituto, conforme el 4to párrafo del art. 76 bis, debe tratarse de delitos que permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena, siendo aquellos que establecen una pena que no exceda de 3 años.

Destacó que el pedido de suspensión de juicio a prueba realizado por la Defensa de los imputados se fundamentaba únicamente en la situación personal de los mismos, razón por la cual no podría tener acogida favorable, ya que lo que debía tenerse en consideración en el caso es el umbral legal mínimo de la escala penal requerido para la aplicación del instituto de suspensión del juicio a prueba, respecto de la cual no corresponde declarar su inconstitucionalidad en atención a las características de los delitos aquí investigados.

Expresó que, dadas las limitaciones que el propio ordenamiento jurídico impone a los fines de encontrar una salida del presente proceso, la única vía disponible para la reparación del daño, en cumplimiento del principio de especialidad, se encontraba en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario, norma que podría proporcionar el marco legal que permitiría a los imputados reparar el perjuicio fiscal ocasionado con su conducta delictiva.

En tal sentido, expuso que corresponde señalar que el instituto extintivo para su aplicación establece que, en forma previa, se abone el total de la







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

pretensión fiscal con más sus accesorios, de modo que quede saldado y cancelado el capital, con más sus intereses, a la fecha de pago.

Concluyó que, cumplidos tales requisitos, en caso que el Tribunal lo considere pertinente, entendía aplicable, a este caso en particular, la reciente doctrina emanada de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala I (causa 1930/2012/TO2-“López Da Silva s/Ley 24769”) del 09/05/2023 y la jurisprudencia que surge de la causa N° 1882/2012 el Tribunal Oral N° 1.

c) La parte Querellante AFIP-DGRSS ratificó su oposición a la aplicación del instituto solicitado en primer término ya que la parte no ofrecía una reparación integral teniendo en cuenta a su vez los hechos materia de investigación durante la instrucción de la causa. En relación a la suspensión del proceso a prueba, expuso que este instituto ya fue rechazado (confirmado por la CFCP) y que la Defensa no expresó los motivos por los cuales se podría aplicar una pena en suspenso ante la calificación legal agravada con la que cuenta la imputación, motivos por los cuales solicitó se rechace también la solicitud de aplicación del mismo. Por último, hicieron expresa reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal.

d) La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que con respecto al monto ofrecido en concepto de reparación integral, si bien el mismo se trata de un concepto civil, la finalidad era resarcir las consecuencias del accionar ilícito que se reprochan en la presente causa. Aclaró que sin perjuicio de reiterar la posición negativa sobre la aplicación del instituto para este tipo de delitos que poseen un régimen propio de extinción, no correspondía tratar de ampliar el objeto procesal, con el argumento de que se trataba de una indemnización civil que debe ser plena por ende la misma se incorporan de aquellos períodos por los cuales fue elevada a juicio, ya que el instituto está integrado a una normativa penal y la reparación plena está delimitada por el objeto procesal de la causa.

### **Sobre las condiciones particulares de los imputados**



e) Con relación a Jorge BALTASAR se pudo constatar que el nombrado tiene 80 años de edad, es viudo, reside en la localidad de Vicente López, PBA, padre de dos hijos mayores de edad y abuelo de dos nietos, ingeniero, trabajó en el ámbito privado y se encuentra jubilado hace diez años. Asimismo, conforme lo informado por la Defensa y certificados aportados, se pudo conocer que en el mes de abril el nombrado padeció un accidente cardiovascular (ACV) por el cual estuvo internado en la Clínica Sagrada Familia durante una semana. Conforme surge del informe confeccionado por el Cuerpo Médico Forense de fecha 19 de junio del corriente año, Jorge BALTASAR refiere discopatía lumbar, patología coronaria e hipertensión arterial, razones por las cuales se encuentra bajo tratamiento con aspirina, apixaban, omeprazol y rosuvastatina (informe del Cuerpo Médico Forense de fecha 19/6/24).

f) Respecto a Cristian H. BALTASAR, surge que el nombrado tiene 51 años de edad, es soltero, padre de una hija de 23 años de edad, se graduó como músico en el Berkeley College of Music. Como actividad laboral brinda clases de música y trabaja en un local de instrumentos musicales. Conforme surge de la historia clínica aportada por la Defensa, Cristian H. BALTASAR padece diabetes tipo 1 diagnosticado en el año 2004 y se encuentra bajo tratamiento y permanente control por ser insulino-dependiente. Asimismo, en el año 2015 le fue diagnosticado parkinson, enfermedad crónica que lo lleva a tener que realizar varios tratamientos, entre los cuales se destaca una cirugía cerebral. Actualmente, dicha enfermedad se manifiesta con etapas de congelamiento (freezing), entre otros síntomas. Conforme lo expresado por su médico clínico, Dr. Edgardo RIONER, su estado de salud general se vería afectado por la realización de un juicio oral (cfr. certificado de fecha 27/5/24). A raíz de las patologías mencionadas diabetes, hipertensión arterial (medicado con valsartan/amlodipia un comprimido al día) y parkinson -con etapas de congelamiento-, encuentra dificultad para realizar sus actividades cotidianas y ejercer su actividad laboral. Conforme surge del informe







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

confeccionado con fecha 18/6/24 por la médica especialista en psiquiatría del Cuerpo Médico Forense, el imputado informó que su neuróloga tratante le indicó un fármaco ansiolítico en el mes de mayo de 2024.

g) Que, a raíz de lo acontecido en la audiencia y el escrito presentado por la Defensa con fecha 19/5/24, se formó incidente para evaluar la posible incapacidad sobreviniente de los imputados Cristian H. BALTASAR y Jorge BALTASAR (CPE 936/2012/TO1/7) en el cual, con fecha 6/8/24, este Tribunal resolvió: “...**NO HACER LUGAR** a la solicitud de suspensión del trámite de de la presente causa efectuada por la Defensa de los imputados Jorge y Cristian BALTASAR por posible incapacidad sobreviniente de los nombrados y, en consecuencia, **CONTINUAR** la tramitación de las causas nros. **CPE 936/2012/TO1** caratulada “BALTASAR, JORGE; BALTASAR, CRISTIAN HERNAN S/INF. LEY 24.769” y **CPE 1194/2014/TO1**, caratulados “BALTASAR, JORGE; BALTASAR, CRISTIAN HERNAN S/ INF. LEY 24.769” según su estado, bajo las consideraciones aquí desarrolladas....”.

### Y CONSIDERANDO:

#### Sobre la solicitud de suspensión de juicio a prueba efectuada por los imputados:

**VII.-** Que, en forma preliminar se adelanta que la solicitud de suspensión de juicio a prueba reiterada por los aquí imputados a través de su Defensa, no puede prosperar.

Sobre ello, corresponde destacar que ninguna cuestión novedosa y esfuerzo argumental fue realizado por la Defensa para tener por desacreditados aquellos fundamentos por los cuales oportunamente fue rechazada la aplicación del instituto, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior mediante resolución de fecha 9/11/23.

En efecto, tanto las Querellantes como la Auxiliar Fiscal ratificaron su oposición, mediante un dictamen del Ministerio Público Fiscal que supera el



control de logicidad y legalidad lo que lo torna vinculante para el Tribunal conforme lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo citado (art. 69 del CPPN) y doctrina plenaria de la CFCP *in re* “Kosuta Teresa”.

En relación a ello se destaca que, tanto en aquella oportunidad y en la presente, se concluye que el análisis llevado a cabo por el Ministerio Público Fiscal supera el control ya que la posición no se circunscribe a mencionar la escala penal mínima aplicable al caso, sino que se hizo referencia las condiciones que lleva a considerar que resulte necesario un mayor conocimiento de los hechos para poder determinar en forma completa las circunstancias de comisión del objeto del debate traído a juicio, la modalidad de la eventual agresión que se verifique y su posible afectación al bien jurídico que se encuentra contemplado por la norma sancionatoria, todo sin perder de vista las circunstancias personales de cada imputado.

En virtud de lo expuesto, se concluye entonces que los fundamentos dados por la representante del Ministerio Público Fiscal tienen suficiente sustento, resistiendo un examen de razonabilidad al presentarse en el caso una motivación suficiente, confiriéndole ello el carácter vinculante que la ley le asigna e impone que corresponda rechazar las solicitudes de suspensión de juicio a prueba efectuadas por los enjuiciados (art. 76 bis del CP párrafo 4to *a contrario sensu*).

**Sobre la posible extinción de la acción por reparación integral prevista en el art. 59 inciso 6to. del CP:**

VIII.- Que, conforme lo indica el Superior, corresponde nuevamente tratar la posibilidad de aplicar la solución prevista en el art. 59 inciso 6to. del CP, petición ratificada por la Defensa durante la audiencia celebrada en autos.

Al respecto la Defensa expuso que, teniendo en cuenta los montos de perjuicio fiscal actualizados aportados por las Querellas y calculado sobre la base de los hechos objeto de imputación seguidos en estos autos y la causa acumulada, sus asistidos ofrecían cancelar en forma integral en el plazo de un





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

mes la suma que surja del cálculo actualizado de los montos que se desprenden de los conceptos y períodos que son objeto de la presente. A la fecha del ofrecimiento estaba estimado en la suma de \$124.620.908.

Sobre ello, las Querellas se remitieron a los fundamentos expresados en la oportunidad anterior en la que resaltaron que la vía de extinción cuya aplicación se solicita no se encontraba actualmente vigente toda vez que no existe previsión procesal que torne operativo el instituto; a su vez sostuvo que el mismo no era aplicable para el régimen penal tributario y que ningún pago se encontraba registrado en orden a la causa.

Finalmente, la Auxiliar Fiscal reiteró que dicho instituto no resultaba aplicable al caso de autos, toda vez que los delitos tributarios poseen una legislación especial propia que consagra una salida anticipada del proceso dando cumplimiento a las obligaciones vencidas (art. 16 de la ley n° 24.769 versión de la ley n° 26.735) o en determinados supuestos con la cancelación en forma incondicional de las obligaciones evadidas (art. 16 del régimen penal tributario de la ley n° 27.430). Todo ello, de conformidad a su vez con la posición asumida en la presente causa por el Fiscal ante la CFCEP en el marco del trámite del recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución de este Tribunal de fecha 27 de febrero de 2023.

Por tales motivos, los acusadores se han pronunciado nuevamente en forma negativa al respecto.

**IX.-** Que, en primer lugar se reitera que a este criterio la causal de extinción de la acción prevista en el art. 59 inciso 6to del CP se encuentra vigente a nivel nacional (ley 27.063) no obstante a ella la falta de implementación de los artículos del código de forma.

En tal sentido, al consagrarse de manera legislativa un mecanismo que puede instrumentarse en procura de resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, debe darse preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas,



tomando tal posibilidad como un derecho para la parte (CSJN Fallos 239 :459). A lo cual, cabe referir, que toda exégesis que se realice de una norma debe encontrar consonancia con aquel principio que ubica al derecho penal como *ultima ratio* del ordenamiento jurídico, en correspondencia con el principio *pro homine* que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde, descartando aquellas que limitan su aplicación sin expresar un criterio de razonabilidad (art. 28 CN) o prescinden de ella de una forma que puede resultar arbitraria (Fallos: 295:606; 301:108; 306:1242; 310:927 ;311:2548; 323:192; 324:547, entre otros).

X.- Que, tal como fuera expresado en la resolución de fecha 23/2/23, se considera que si por art. 4 del CP las disposiciones del ordenamiento de fondo se aplican a los delitos previstos en leyes especiales siempre que éstas *no dispusieran lo contrario*; que el art. 2 del CPPN establece, en lo sustancial, que toda disposición que limite el ejercicio de un derecho atribuido por dicho ordenamiento deberá ser interpretado *restrictivamente* y que con la existencia de un régimen particular propio de extinción de la acción penal establecido en una ley especial -como lo es la ley penal tributaria (y sus reformas)-, no se estableció en forma excluyente a la posibilidad de utilizar otras vías alternativas de solución al conflicto penal, se colige que el instituto sobre la reparación integral del perjuicio es aplicable también a los delitos tributarios, independientemente de su régimen especial.

Que, en definitiva, esta interpretación sobre la aplicación del principio de legalidad es acorde a los lineamientos establecidos por la CSJN en los precedentes “Acosta” (Fallos 331:858) y “VIDAL” (Fallo 344:3156), destacando que, en el último citado, se ha indicado que “ ... 21) Que, desde hace décadas, la Corte Suprema ha señalado que uno de los peores males que el país soporta es el gravísimo perjuicio social causado por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos que proviene de la evasión o bien de la extensa demora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que, en la medida en que su competencia lo autorice, los jueces tienen el





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

*deber de contribuir a la aminoración de esos dañosos factores y comprender que son disvaliosas las soluciones que involuntariamente los favorecen (Fallos: 313:1420 y sus citas) (...) Extremo que adquiere especial significación en materia penal atento a que la observancia de las reglas generales de hermenéutica jurídica no agota la interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad -art. 18 de la Constitución Nacional- exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico ; y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (Fallos: 342:2344 “Farina”, considerando 10, último párrafo) (...) Lo recién señalado remite enfáticamente a recordar que, en esa tarea, los jueces, en cuanto servidores de justicia en el caso concreto, no deben limitarse a la aplicación mecánica de las normas y desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto, pues de lo contrario aplicar la ley se convertiría en una tarea incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados, tarea en la que tampoco cabe prescindir de las consecuencias que se derivan de los fallos, pues ello constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión (conf. arg. Fallos: 315:992; 323:3139; 326:3593 ; 328:4818 y 331:1262, entre otros)...”*

**XI.-** Que, lo expuesto precedentemente, lleva a que se deba evaluar en este caso la posibilidad de aplicar el instituto de la reparación integral que pretende la Defensa, tomando que en una primera oportunidad se estimó necesario un acuerdo de las partes en la solución a efectos de reestablecer la armonía entre los protagonistas y la paz social, conforme los lineamientos del art. 22 del CPPF y ello no fue receptado por el Tribunal Superior al anular lo resuelto luego de advertir una contradicción en requerir montos actualizados y fundar una oposición en razones dogmáticas. En las pautas fijadas, la



viabilidad del instituto no depende de falta de consentimiento de los acusadores (AFIP/DGI y MPF) al mantenerse posturas dogmáticas que no dan respuesta a los motivos que en el caso llevan a oponerse a la posibilidad de implementar el mecanismo previsto en el art. 59, 6 del CP como forma de solución por vía económica al conflicto tributario.

En efecto, las partes acusadoras ratificaron que dicha postura no se relacionaba con el cálculo del monto del posible perjuicio fiscal -respecto del cual se reitera la Defensa ofreció abonar el mismo actualizado y en su totalidad- sino con la viabilidad del instituto, el cual no consideran aplicable por resultar incompatible con los requisitos legales impuestos en el propio régimen de extinción de la acción previsto el régimen penal tributario.

En relación a ello, la Sra. Fiscal Auxiliar hizo remisión a los argumentos desarrollados en este caso en particular por el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen de fecha 19/4/11 al que se hace remisión en honor a la brevedad. Por otro lado, la Querella AFIP-DGI efectuó cita de la jurisprudencia de Sala I de la CFCP en el caso CPE 1930/2012/TO2/5/CFC2”, caratulado: “LÓPEZ DA SILVA, Antonio s/recurso de casación”, Reg. Nro. 428/23, Rta. 9/5/23.

**XII.-** Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, no se puede soslayar que de la lectura de los fundamentos esbozados por los acusadores surge con meridiana claridad que el pago integral actualizado podría aceptarse de efectuarse bajo las condiciones especiales establecidas en leyes especiales propias.

Así, corresponde tener en consideración que recientemente fue sancionada y promulgada la ley 27.743 (Publicada en el Boletín Oficial el 8/7/24) que establece el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr el pago voluntario de las obligaciones que pudieran registrar los contribuyentes, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de adhesión y el tipo de deuda que registren (art. 1 de la legislación citada). Asimismo, se encuentra vigente la

~~Resolución General Nro. 5525/2024 de AFIP por la que se extiende a sujetos~~







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

solidarios la posibilidad de adherirse al régimen de regularización con menores requisitos que el obligado principal - ver art. 33 - lo cual expresa de la siguiente manera: “ *ARTÍCULO 33.- Los responsables solidarios, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones impositivas, aduaneras o de los recursos de la seguridad social correspondiente al deudor principal, aun cuando este último se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el artículo 4° de la Ley N° 27.743, podrán, en tal carácter, adherir al presente régimen de regularización.*

*En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudieran realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá, respecto del presentante, la obligación establecida en el inciso a) del artículo 4° de esta resolución general. En caso de que dichos sujetos opten por adherir a los planes de facilidades de pago previstos en el Título I de la Ley N° 27.743, las condiciones de los mismos -cantidad máxima de cuotas, tasa de interés de financiación y porcentaje del pago a cuenta, según corresponda- se determinarán en función del tipo de contribuyente en el que, conforme a lo establecido en el artículo 6° de la presente, se encuentre incluido el deudor principal.*

*Cuando hubiera mediado determinación de oficio contra el responsable solidario y la deuda incluida en el acogimiento se encuentre en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, a los fines del acogimiento, deberá cumplimentarse lo dispuesto en el Apartado Q de la presente.*

*Lo señalado precedentemente procederá sin perjuicio de la subrogación de los derechos del Fisco contra el contribuyente y/o responsable principal que pudiera corresponder a favor del sujeto que realice el acogimiento a que se refiere este artículo.”*

En tales circunstancias, ante la falta de una previsión legal que en concreto regule la aplicación del instituto, a efectos de evaluar la propuesta de





la defensa se debe estar al juego armónico de aquellas normas por las cuales las leyes penales tratan de dar respuesta al interrogante que se plantea, esto es la reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible y la indemnización del daño material (art. 29 inc. 1° y 2° del CP) según la propuesta económica concreta; la restitución del objeto materia del delito (art. 403 2do. párrafo del CPP) o una posible reparación de un daño moral causado a la víctima (arts. 29 inc. 2° del CP) esto último no se presenta en el caso; el pago de las costas (íd. Inc. 3°), sin dejar de lado el posible decomiso del producto o el provecho del delito (arts. 30 inc. 3° y 76 bis párrafo 6to. del CP) para lo que debe estarse al final del proceso. En el campo del derecho civil, el concepto de reparación integral está ligado a la “... *restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie...*” (art. 1740 CCyCN) y cuando se trata de bienes inmateriales se dirige, en esencia, a hacer desaparecer los efectos del hecho ocurrido mediante alguna forma de compensación, de ello corresponde evaluar si con la propuesta se encuentran reunidos los requisitos para su aplicación como pretende la defensa.

**XIII.-** Así, en el caso concreto, se encuentra que la defensa de Cristian Hernán y Jorge BALTASAR ha presentado la reparación como solución, en forma unilateral, ofreciendo el pago, en montos actualizados, de las sumas que integran los conceptos y períodos que se encuentran en juicio, pretendiendo darle a la cancelación de los sumas que sean determinados -tomando los montos que se identifican como pretendidos por cada uno de los conceptos y períodos que resultan objeto de las acciones que en la presente- un efecto que permita extinguir las acciones que se siguen por tales hechos traídos a juicio respecto de los nombrados en orden a la contribuyente CLITEC S.A. y las acusadoras oponiéndose al sostener que el mecanismo propuesto para la solución del conflicto no puede ser empleado en materia tributaria. La posición última se presenta como arbitraria, tomando lo ya resuelto en la causa, lo señalado la Corte Suprema de Justicia cuando indica





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

que frente a dos posibles interpretaciones en juego y el principio *pro homine* que obliga a adoptar aquella que amplíe en mayor medida los derechos individuales, todo lo cual muestra la falta de razonabilidad de una postura que sostiene, con fundamentos dogmáticos, la inaplicabilidad del art. 59.6 del CP en casos en los cuales los hechos imputados caen bajo calificaciones previstas por la ley penal tributaria.

Al respecto, no puede soslayarse que según lo ya dicho la interpretación judicial está condicionada a los principios establecidos en la Constitución Nacional, los cuales obligan al Tribunal a optar siempre por la interpretación de las normas que resulte más favorable a los imputados y es la CADH, en su art. 30, donde se establece que toda restricción de derechos debe encontrarse fundamentada en razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, debiendo estarse a la interpretación más extensiva de la norma cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Tal como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que “...*el principio pro homine [...] implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales*” (CIDH, caso “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, sentencia del 26 de noviembre de 2010, voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac Gregor, párr. 38) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisó que “*en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos*” (CIDH, Informe 35/07, en el caso n° 12.553, “Jorge, José y Dante Peirano Basso vs. República Oriental del Uruguay”, 1° de mayo de 2007).

Ante tal circunstancia, también se destaca que en diferentes oportunidades se han establecido mecanismos de cancelación -similares al hoy vigente- que limitan la persecución penal ante un conflicto de orden



tributario, mostrando como admisible una solución de orden patrimonial ante tales conductas, preponderando en determinadas circunstancias el fin recaudatorio del sistema y el evitar el dispendio jurisdiccional.

Al respecto, debe notarse que la defensa no muestra ánimo de discutir el monto que sea establecido por el organismo recaudador y ofrece su cancelación en un tiempo muy breve, lo que brinda condiciones más favorables para las arcas públicas que las establecidas por el último régimen de regularización, todo lo cual lleva a que pueda afirmarse que estamos ante una propuesta que, de mínima, abarca valores actualizados de la totalidad de los conceptos hoy en juicio, montos que serán liquidados por técnicos del organismo recaudador.

Cabe reiterar, en el mismo sentido, que aquellas sumas que sean ingresadas podrán tener una correspondencia que permita una imputación específica de la transferencia a cumplirse y vincularlos para aplicados a los hechos de autos, resultando posible conciliar los montos transferidos con aquéllos que forman parte de las causas. Bajo tal base, en la actualidad y con un positivo confronte de conceptos y montos que deben ser ingresados, se podrá sostener que los montos que conforman los tributos y cargas sociales que dan origen a las acciones que aquí se siguen se encuentran canceladas, resultando viable de tal forma, a este criterio, la salida alternativa al conflicto, como se pretende, en los términos del art. 59 inc. 6 del CP.

En tal aspecto, se requerirá al organismo recaudador que tomando las planillas que se encuentran agregadas correspondientes a los conceptos y montos que resultan objeto de la presente se practique una liquidación actualizada de tales montos (capital e intereses), los que deberán ser cancelados en el término de 30 días, períodos durante el cual, a efectos de hacer posible la solución que se propone, se suspenderá la acción que se sigue.

**XIV.-** Que, por otra parte, como se ha reseñado, los magistrados deben decidir en el caso concreto sin desentenderse de las circunstancias fácticas con incidencia en la resolución del conflicto y en el caso no puede dejar de





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1

CPE 936/2012/TO1

evaluarse el tiempo transcurrido en la tramitación del proceso, con virtuales 15 años desde la ocurrencia de los hechos, 12 años desde su inicio (la primera denuncia de AFIP-DGI fue de fecha 29/6/12) y casi 6 años en la etapa de juicio (recibida la primera de las causas el 12/11/18), el actual estado de salud de cada uno de los imputados -lo que ya ha sido reseñado- de lo que se destaca que se trata de enfermedades que afectan a la condición general y carecen de un tratamiento que permita la cura. Tales circunstancias dan apoyo a la solución que aquí se adopta, al resultar que la misma permitiría poner fin al trámite de un largo proceso y el padecimiento que todo proceso penal acarrea, resultando entonces la que mejor se adecúa a la vigencia del derechos a la salud y a la integridad personal consagrados por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, directamente operativos (arts. 33 de la CN y 8 del Pacto de San José de Costa Rica) y reflejan el principio de humanidad, contenido implícitamente en aquellos derechos.

Por lo expuesto, oídas las partes,

### SE RESUELVE:

1) **NO HACER LUGAR** en la presente causa **CPE 936/2012/TO1** y su **conexa CPE 1194/2014/TO1** a la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada por los imputados Jorge BALTASAR y Cristian H. BALTASAR.

2) **DECLARAR** procedente en la presente causa **CPE 936/2012/TO1** y su **conexa CPE 1194/2014/TO1** al pedido de aplicar del instituto de reparación previsto en el art. 59 inciso 6to del CP, efectuado por la Defensa de Jorge BALTASAR y Cristian H. BALTASAR;

3) **REQUERIR**, por intermedio de las querellas, que en el término de cinco días de firme la presente, informen al Tribunal los montos actualizados correspondientes a cada tributo y período objeto de la presente.



**4) SUSPENDER** en la presente causa **CPE 936/2012/TO1 y su conexas CPE 1194/2014/TO1**, la acción penal que aquí se sigue, por plazo de 30 días a contar de firme la presente, a efectos que sean cancelados, en el mismo término (30 días), los montos que sean informados (punto 3).

**5) TENER PRESENTES** las reservas efectuadas por las partes.

Publíquese y notifíquese.

**JORGE ALEJANDRO ZABALA. JUEZ DE CÁMARA. ANTE MI:**  
**MARIANA CALAON. SECRETARIA DE CÁMARA.**

